



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA LABORAL**

Medellín, febrero 16 de 2023

Radicado: 05001-31-05-013-2020-00065-01  
Demandante: LEIDA ESTHER JIMÉNEZ TORRES  
Demandados: COLPENSIONES, PORVENIR, SKANDIA Y LA NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA  
LI. Garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.  
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA  
Tema: INEFICACIA DE TRASLADO ENTRE REGÍMENES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

Conforme a la fijación del litigio el proceso giró en torno a definir si le asiste derecho a la demandante a la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, al igual que la ineficacia de la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez y del reconocimiento de la devolución de saldos ya pagado por Porvenir por valor de \$170'446.472

De forma conexa solicita se reactive la afiliación en el RPM; ordene a las AFP Porvenir y Skandia a responder ante Colpensiones por las restituciones mutuas relativas a la

declaratoria de ineficacia; además determinar si es viable ordenar a Porvenir devolver los bonos pensionales a la Nación-Ministerio de Hacienda o a Colpensiones.

En caso de acceder a la declaratoria de ineficacia del traslado, se analiza la viabilidad de una orden de reconocimiento pensional a cargo de Colpensiones conforme a la Ley 797 de 2003 al igual si habría lugar a declarar a Porvenir responsable de la indemnización de perjuicios tasados en la suma de \$170'446.472 (aquellos recibidos por devolución de saldos). De igual forma se determinaría si corresponde a Mapfre Seguros Sociales a la devolución de los dineros del seguro previsional de los años 2008 y 2009 tiempo de afiliación a través de la AFP Skandia.

**En subsidio**, se estimaría si existe mérito para que Porvenir reconozca la pensión de vejez con las normas propias del RPM o por garantía de pensión de mínima que establece el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

**En sentencia de primera instancia**, la A quo tras manifestar que las AFP accionadas no probaron haber ilustrado a la actora de las consecuencias del traslado entre regímenes y el haber brindado una información profesional, completa y veraz respecto de las implicaciones de tal acto jurídico, declaró ineficaz el traslado entre regímenes, con la consecuente obligación de la APF Porvenir de trasladar los gastos de administración, los descuentos destinados al fondo de garantía de la pensión mínima y los dineros utilizados en los seguros previsionales. Respecto de la APF Skandia dispuso la devolución a Colpensiones de los recursos captados como gastos de administración.

Como consecuencia, ordenó a Colpensiones a reconocer la pensión de vejez a partir del 1° de marzo de 2019, tomando como valor de la mesada pensional la suma de \$3.145.855 para 2019; \$3.265.397 para 2020; \$3.317.970 para 2021 y \$3.504.440 para 2022, debiendo compensar el retroactivo pensional con lo ya recibido por devolución de saldos (\$170.446.472) , y una vez agotado corresponde a Colpensiones asumir su pago con inclusión en nómina de pensionados, realizando los descuentos, incluso retroactivos, con destino al sistema de seguridad social en salud.

Respecto a los perjuicios pretendidos, los que la actora tasó en la suma de \$170'446.472 y que estima causados en razón de la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, con repercusión en su salud física, mental, la estabilidad en el ámbito familiar, además de obligarle a permanecer activa laboralmente, refirió la falladora que

la actora no probó un perjuicio cierto, destacando que con la declaratoria de ineficacia a la señora Jiménez Torres se le reconoce la pensión de vejez sin que exista una diferencia en la prestación, teniendo en cuenta que en el año 2019 ésta recibió una suma considerable, a la que no habría tenido derecho de forma conjunta a la pensión. En cuanto a los elementos de la historia clínica concluyó que sus padecimientos no son necesariamente consecuencia de la condición pensional, por lo que no existe un nexo causal (minuto 56 en adelante)

Inconforme con la decisión fue **recurrida así**:

**La activa**, expuso inconformidad insistiendo en la procedencia de la indexación de las mesadas. Reprocha de la decisión la orden de compensación la que debe respetar el mínimo vital de la actora, permitiendo que esta opere solo por el exceso del SMLMV, de lo contrario Colpensiones podría descontar el 100% del valor de la mesada pensional hasta alcanzar el monto total.

Insiste en la condena por perjuicios los que en su sentir están probados, al igual que el nexo causal, daños que se prueban con la certificación de la EPS, la cual indica que la parte demandante sufraga su propia Seguridad Social en Salud y la prueba de certificación laboral demuestra que el extender la vida laboral de la demandante por más de 5 años con sus achaques físicos y mentales, lo cual prueba un desgaste natural.

**Colpensiones** recurrió la sentencia de manera parcial, solicitando su complementación, ordenando a la AFP Skandia la devolución de lo que corresponde a seguros previsionales y recursos para garantía de pensión mínima por el tiempo en que la demandante haya permanecido en dicho fondo y a su vez solicitar que todos los valores trasladados por los fondos privados sean indexados.

**AFP Porvenir** solicitó la revocatoria parcial la sentencia de primera instancia expresando que la actora consintió el traslado de régimen, manifestación que quedó plasmada en el formulario de afiliación, el cual goza de plena validez y fue producto de la voluntad de ambos contratantes, por lo que no era procedente invalidar tal manifestación.

Señaló que la devolución de saldos cumplió con todos los requisitos legales para ello, recibiendo dineros provenientes de Ministerio de Hacienda, por tanto, la declaratoria de

ineficacia debe contener la orden de retorno de estos recursos a cargo de la actora, so pena de incurrir en un enriquecimiento sin causa, donde la actora pretende desconocer los efectos de sus propios actos y solicitudes ante la AFP afectando la sostenibilidad financiera de la misma, siendo este un derecho consolidado.

Por lo tanto, adujo que tampoco procede el traslado con cargo al propio patrimonio de la AFP los descuentos realizados durante el tiempo de la afiliación, los que a su vez generaron rendimientos en los recursos administrados.

**AFP Skandia**, solicitó la revocatoria parcial el fallo de primera instancia, exponiendo que a pesar de que la ineficacia declarada no afecta de manera directa a la AFP, sí repercute en la vinculación que tuvo la demandante con esta, sin que pueda desconocerse que la actora cuenta con un estatus ya consolidado similar a la condición del pensionado. Oponiéndose de igual forma a la devolución de las cuotas de administración, cuya apropiación respondió a premisas legales y los que a su vez generaron rendimientos en los recursos administrados.

## **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, Colpensiones, la APF Porvenir y la parte actora presentaron escritos donde reiteran sus argumentos objeto de apelación. A su turno Mapfre quien no recurrió la sentencia solicita la confirmación de la decisión de primera instancia.

## **CONSIDERACIONES DE INSTANCIA**

De acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión que: **1)** Que Leida Esther Jiménez Torres nació el 21 de julio de 1960 (página 28 archivo N°01); **2)** Que realizó cotizaciones al RPM a través del extinto ISS desde febrero de 1986 hasta marzo de 1995 (página 32/35 archivo N°02), migrando al Régimen de Ahorro individual a través de la AFP Porvenir, afiliación que se hizo efectiva a partir del 1° de abril de 1995 (página 75 archivo N°12), trasladándose en el mes de noviembre de 2008 a la AFP Skandia (página 45 archivo N°08), finalmente retornando en el mes de junio de 2009 a la AFP Porvenir (página 117 archivo N°12), **3)** Que en abril de 2019 Porvenir niega solicitud de pensión de vejez y en su lugar se aprueba devolución de saldos por un valor de \$143.482.062, (página 111/112 archivo N°12) **4)**

Que en agosto de 2020 le fue pagado un valor de \$26,964,410 correspondiente a un bono pensional que estaba pendiente (página 115 archivo N°12).

Conforme a las anteriores premisas, se advierte que el eje central de la controversia en esta instancia gira en torno de establecer si es posible acceder a la solicitud de ineficacia del traslado del RAIS efectuado por la accionante cuando ya le fue reconocida la devolución de saldos por el fondo del Régimen de Ahorro Individual. De igual forma se estudiará la viabilidad del reconocimiento de perjuicios que reclama la actora, así como la prosperidad de las condenas subsidiarias expuestas por la activa.

# **1. PROCENDENCIA DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA Y RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ POR PARTE DE COLPENSIONES**

Pues bien, es de anotar que este despacho era del criterio que la ineficacia podía declararse con independencia de si el solicitante se encontraba o no pensionado en tanto lo que se ponderaba en sede judicial era el cumplimiento de los requisitos del acto de traslado de régimen, más allá de los actos posteriores o incluso las utilidades que buscase la parte, en aras de verificar la satisfacción plena y total del derecho pensional.

No obstante el órgano de cierre de esta jurisdicción dejó claro que cuando el solicitante ha consolidado una situación dentro del Régimen de Ahorro Individual, la evaluación y determinación de la ineficacia trasciende a algunas situaciones jurídicas que se encuentran causadas jurídicamente y que por tanto deben ser respetadas, so pena de afectarse con ello derechos de terceros que han intervenido en el proceso pensional, con graves consecuencias que eventualmente repercutirían en el sistema de seguridad social.

Es así que en sentencia SL 373 del 2021 el alto tribunal, ante el interrogante de si es posible acceder a la ineficacia de traslado de quien ya se encuentra pensionado, expuso cómo la consolidación de un status en el RAIS acompañado del agotamiento de los recursos de la CAI y los eventuales bonos pensionales impide retrotraer los efectos de la migración entre regímenes, así:

*“Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber*

*existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante) 1, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, 1 SL1688-2019, SL3464-2019 Radicación n.º 84475 SCLAJPT-10 V.00 16 renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de Radicación n.º 84475 SCLAJPT-10 V.00 17 la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993),*

*en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

Posición que ha sido reiterada en providencias tales como SL 2198 de 2022, SL 1798 de 2022, SL 2042 de 2022 entre otras.

En este caso en concreto se tiene que, a la demandante le fue negada la pensión de vejez y le fue reconocida la devolución de saldos por un valor de \$143.482.062, (página 111/112 archivo N°12) como también, le fue pagado un valor de \$26,964,410 correspondiente a un bono pensional que se hallaba pendiente (página 115 archivo N°12), recibiendo en total la suma de \$170'446.472, lo que comporta no solo la consolidación de un derecho pensional definitivo en la actora, pero además el agotamiento de los recursos que fueron acopiados en ambos regímenes para la satisfacción de las diferentes contingencias, como lo fue en este caso por el riesgo de vejez, bajo la figura de la devolución de saldos.

Se destaca que previo al 17 de enero de 2019 la señora Jiménez Torres, sin que de forma previa hubiera cuestionado la calidad de afiliada al RAIS, radicó ante Porvenir la solicitud de reconocimiento pensional. Luego en misiva del 5 de abril de 2019 se informó de la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez y se expuso la viabilidad de acceder a la devolución de saldos, la que como ya se enunció se perfeccionó (pág 92/95 archivo N° 1), lo que devela que más allá de las eventuales irregularidades en la migración de régimen pensional, la accionante generó un estatus dentro del RAIS que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ impiden la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS como también retrotraer los efectos de la devolución de saldos.

Ahora bien, no desconoce esta corporación el sentido de la sentencia CSJ SL 3464 de 2019 donde se declaró la ineficacia de la afiliación pese a contarse con un reconocimiento de devolución de saldos, sin embargo no puede pasarse por alto que la argumentación allí vertida es previa a la reconsideración que tras la sentencia SL 373 de 2021 se acuñó, la que como ya se expuso, se detiene en los efectos que patrimonialmente genera la consecución de una prestación dentro del RAIS, el agotamiento de los recursos acopiados para financiar las pensiones, la consumación de la redención del bono pensional, la afectación de derechos de tercero, al igual que los riesgos para el sistema pensional público en detrimento de los intereses generales

de los Colombianos, por lo que no puede pasarse por alto que existe un status jurídico que no es razonable revertir ni retrotraer.

Se destaca que la conclusión a la que arribó la falladora de instancia impone a Colpensiones una carga pensional que no tendrá un respaldo económico, donde la única devolución a recibir sería aquellos porcentajes como gastos de administración y de pólizas previsionales, sumas con las que no se consigue un aporte significativo al régimen público.

Así las cosas, dadas las particularidades de este evento se declara impróspera la pretensión de declaratoria de ineficacia, lo que de suyo trae como consecuencia la revocatoria de las órdenes de reactivación de la afiliación en el RPM, reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones con las compensaciones que dispuso la A quo, al igual que la anulación del bono pensional, órdenes contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la parte resolutive.

## **2. RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS EN AUSENCIA DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO ENTRE REGÍMENES**

Por otra parte, referente a los perjuicios reclamados, los que hicieron parte de la fijación del litigio, frente a los cuales se surtió un debate y la falladora de instancia emitió una decisión, una vez más se remite esta corporación al criterio actual y pacífico de la Sala de Casación de la CSJ que establece que en tratándose de ciudadanos con una situación consolidada, en razón a la omisión en el deber de información pueden reclamar el pago de perjuicios. Al respecto la sentencia SL 373 de 2021:

*“Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.*

*El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere*



*necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados”.*

La anterior reseña muestra que se trata de una acción consecuencial a la consolidación del derecho dentro del RAIS, a la que se puede aspirar pese a la negativa de acceder la declaratoria de ineficacia en el traslado entre regímenes.

En adición resulta acertado acudir a las premisas del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños, norma a la se remite esta corporación para resarcir los perjuicios irrogados al ciudadano que acusa a la AFP de lesionar sus derechos.

Se devala entonces que los perjuicios no comportan un asunto ajeno a la regulación laboral ni exclusivo de jurisdicción ordinaria en la especialidad civil, sino que irradia todo el ordenamiento legal y que corresponde al funcionario judicial emitir un pronunciamiento so pena de violar el postulado del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia

Con estas premisas se descende al caso concreto y se verifica que para la señora Jiménez Torres de haber permanecido en el RPM habría satisfecho las premisas del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 que le permitirían acceder a la pensión de vejez, la que fue calculada por la falladora de instancia para el año 2019 EN \$3'145.855, con sus aumentos anuales conforme a la variación del IPC, donde el retroactivo pensional para mes de enero de 2023 ascendería a \$161'530.896, lo que presenta un real y serio perjuicio material para la accionante.

La siguiente gráfica demuestra el retraactivo pensional calculado por la falladora de instancia y aquella que se generaría a razón de 1 SMLMV, diferencia que tiene incidencia en la tasación de los perjuicios como se expondrá:

[illegible]

Prestación que se seguiría causando en el tiempo, que de acuerdo a la resolución N° 1550 de 2010 de la superintendencia Financiera de Colombia, la expectativa de vida para la actora sería de 25.3 años adicionales ó 328.9 mesadas.

A la par la activa aludió a la causación de perjuicios morales, los que señaló corresponden al deterioro de su salud producto de la negativa de acceder a la pensión reclamada, que le permitiera cesar su actividad laboral y gozar de renta vitalicia con la cual satisfaga de forma independiente sus necesidades básicas.

Para sustentar tal petición se valió de la prueba testimonial; fue así como en diligencia del 26 de enero de 2022 fueron escuchados los testigos Oscar de Jesús Hernández Monroy, Geovanny Carrasquilla Guardo y Deisy Roa Castro, testigos que de forma unánime expresaron que la señora Leyda Esther continuaba activa laboralmente como directiva de una institución educativa, además detallaron que esta mujer ha presentado una considerable desmejora en su salud, con dolencias a nivel emocional y físico, todas éstas exacerbadas por la angustia de no tener un panorama pensional resuelto y la necesidad de continuar activa laboralmente, pese a tener más de 60 años de edad, de los cuales ha laborado por más de 40 años.

Fue así que **Oscar de Jesús Hernández Monroy** (tiempo de la audiencia minuto 49 en adelante) quien se identificó como esposo de la demandante, pero además médico de profesión, refirió que su esposa presenta varios diagnósticos como osteoporosis, es prediabética, enfermedades que se han exacerbado en razón a un cuadro de ansiedad y depresión, precisando que el tratamiento de cualquier enfermedad corporal se ve afectado por la condición mental, por ello pese a que las enfermedades de base (osteoporosis y diabetes) tienen un tratamiento con medicación, consultas médicas, cambios en el estilo de vida, entre otras, su efectividad estará medida por la salud mental del paciente.

Luego, este testigo desde su conocimiento personal y estrecho con la demandante refirió que el detonante de la ansiedad y problemas psicológicos de aquella es su indefinición pensional, al saber que no podría acceder a su pensión, obligándola a continuar activa laboralmente de donde cree no podrá retirarse nunca pues teme por su futuro.

**Geovanny Carrasquilla Guardo** (tiempo de la audiencia minuto 1:41:00) de profesión psicólogo refirió ser el terapeuta de la actora quien tiene un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión que se genera por una dificultad pensional siendo este el cuadro detonante (minuto 1:48:00), condición emocional que irradia en otras afecciones de base como su diagnóstico de osteoporosis. Refiere este profesional que la condición de la señora Jiménez Torres requiere de la intervención farmacéutica por lo que en el mes de agosto de 2019 la remitió a psiquiatría.

La testigo **Deisy Roa Castro** (tiempo de la audiencia minuto 2:29:00) indicó ser compañera de trabajo de la demandante desde el año 1985, por lo que ha presenciado el deterioro en la salud de aquella, a quien identificaba como una mujer alegre, activa, quien tenía grandes expectativas para su momento de retiro pensional, pero los que se vieron truncados por el traslado de régimen y posterior negativa del derecho a la pensión. Narra que Leida Esther debe medicarse, recibe tratamiento de medicina tradicional y alternativa.

Son estas las pruebas obrantes en el proceso con lo cual se establece que la indefinición pensional y luego la negativa a su acceso generó en Leida Esther Jiménez un real perjuicio en la esfera psicológica. Los testigos desde las áreas médicas, psicológicas y del conocimiento personal de la actora describen cómo la noticia de no acceder a una renta permanente derruyó las aspiraciones que respecto a la edad de retiro pensional había construido la actora; relatan cómo esta tras una dedicación laboral de más de 40 años, vio cómo su recorrido en el empleo debería continuar, causando una fatiga mental que llevó a la exacerbación de dolencias físicas.

Para esta corporación el panorama expuesto tiene una justificación de cara a los fines a la pensión de vejez, cual es garantizar un retiro en condiciones dignas acordes con aquel que se sostenía dentro de la etapa productiva de la vida. Reconoce la corporación que la pensión de vejez opera como una recompensa frente a un recorrido largo de actividad productiva, atendiendo a la mengua en la fuerza corporales y mentales, donde el sujeto ha de entrar a disfrutar de una etapa más pausada a gozar de la prestación por la que tras décadas aportó.

Es así que no es extraño que Leida Esther Jiménez al ver truncado su proyecto de retiro en la vejez experimente dolencias mentales y físicas, cuya génesis data del año 1995 cuando la AFP Porvenir faltó al deber información migró al RPM y el daño se materializó

en el año 2019, cuando se enfrentó a la negativa de acceder a la pensión esperada, daño que corresponde ser reparado a la AFP Porvenir.

Así las cosas, probado tanto el perjuicio material, como aquel en el plano moral, encuentra la corporación procedente la condena por perjuicios, los que la actora desde el escrito de la demanda tasó en \$170'446.472 monto que concede esta corporación como suma única, no solo porque fue esta la estimación de la actora, sino además porque allí se comprende la diferencia entre la mesada pensional que tasó la falladora de instancia atendiendo a las reglas del RPM y una pensión a razón de 1 SMLMV, que acumulado hasta el 31 de enero de 2023 (\$117'192.445 monto que se mostró en la tabla previa) y \$53'254.027 como perjuicios inmateriales, que totalizan el valor reclamado sin que haya lugar a suma adicional ya que fue la actora quien tasó el perjuicio irrogado.

Y toda vez que fue esta la suma que efectivamente recibió la señora Jiménez Torres como devolución de saldos, se declarará que operó un pago anticipado de los perjuicios, sin lugar reconocimiento adicional por este concepto.

Valor que no se encuentra afectado por la prescripción extintiva por cuanto conforme la sentencia SL 373 de 2021 el hito inicial de afectación lo es el reconocimiento prestacional que consolida el estatus dentro del RAIS que en este caso lo fue con misiva del 8 de abril de 2019 (pág111 archivo N° 12) y habiéndose presentado la acción judicial el 6 de febrero de 2020 no corrió el lapso de 3 años que establece el artículo 151 del CPTSS,

Suma que se encuentra a cargo de la AFP Porvenir como entidad que gestó el cambio de régimen sin la debida asesoría previa. Sobre su pago se volverá más adelante.

### **3. RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ DENTRO DEL RAIS**

Ahora bien, pasando a las pretensiones subsidiarias, relacionó el escrito de demanda y la falladora de instancia en la fijación del litigio dos opciones: el reconocimiento pensional por parte de Porvenir bajo las reglas del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 ó bajo la garantía de pensión mínima – artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

En relación al reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la AFP Porvenir SA a la misma no hay lugar teniendo en cuenta que ambos regímenes pensionales aunque prevén el cubrimiento al riesgo de vejez, la forma como se accede y la prestación es disímil, sin que sea posible realizar una mixtura entre estos sin desnaturaliza su esencia y a crear un tercer régimen no establecido por el legislador, así las cosas se absuelve de tal pretensión.

Luego, respecto a la ***petición de pensión de vejez bajo la modalidad de garantía de pensión mínima***, parte esta corporación de establecer que dentro del RAIS cada afiliado durante su vida laboral acumula el capital necesario para financiar su pensión por retiro. Sistema que pese a entregar al ciudadano la responsabilidad de acopiar los recursos económicos, no desconoce la realidad económica del país y la inestabilidad en materia de empleo que, en muchas ocasiones lleva a que las personas, no obstante, a realizar esfuerzos pensionales no alcanzaran la una pensión mínima de vejez.

Para tales eventos se previó dentro de este régimen la garantía de pensión mínima de vejez, que opera cuando el afiliado que ha superado una edad de 57 ó 62 años de edad (para mujeres y hombres respectivamente) y acumule un mínimo de 1150 semanas de cotización. Acceso a la prestación que se obtiene completando los recursos que financiarán la pensión, misión que se entregó a la Nación, oficina de obligaciones pensionales del Ministerio de Hacienda<sup>1</sup>, bajo el entendido que es el fondo de pensiones como representante del afiliado quien gestiona tal beneficio, presentando la documentación que sea necesaria, así lo establece el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, al constituir como *“la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima”*

<b>ARTÍCULO 83. PAGO DE LA GARANTIA.</b> <i>Para las personas que tienen</i>
--

---

<sup>1</sup> Decreto 832 de 1996

(...)

**Artículo 4º.** *Reconocimiento de la garantía de pensión mínima.*

*Corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las cuales, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les corresponde adelantar los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima. [...]*

*acceso a las garantías estatales de pensión mínima, tales garantías se pagarán a partir del momento en el cual la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea inferior a doce veces la pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia a contratar con el capital disponible sea inferior a la pensión mínima vigente.*

*La administradora o la compañía de seguros que tenga a su cargo las pensiones, cualquiera sea la modalidad de pensión, será la encargada de efectuar, **a nombre del pensionado**, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.* (Se resalta y subraya).

Señalaba el artículo 84 de la Ley 100 de 1993 que no habría lugar a acceder a esta modalidad cuando el afiliado recibiera rentas, pensiones o remuneraciones en cuantía superior a lo que se garantizaría a través de esta garantía estatal. Norma que fue derogada por la Ley 1955 de 2019 y que aun en su vigencia fue objeto de modulación e interpretación por la Sala de Casación Laboral de la CSJ, señalando que debía distinguirse la temporalidad de tal ingreso que hace nugatorio el derecho, es así solo en tratándose de ingresos permanentes (a modo de ejemplo el disfrutar de una pensión vitalicia) impide el acceso a la pensión de que trata el artículo 64 Ley 100 de 1993, no así cuando tiene el carácter de temporal (como lo son los salarios) lo que no excluye el beneficio, sino que lo posterga hasta que cese tal ingreso (al respecto la sentencia CSJ SL 4252 de 2021), pero se resalta que tal restricción desapareció con la Ley 1955 de 2019 del 25 de mayo de 2019.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que la AFP como entidad que reconoce derechos pensionales ha de cumplir con unos plazos para pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de sus afiliados, tiempos que no podrán excusarse alegando trabas en el trámite provenientes ora de su propia responsabilidad, ora de terceros, así lo indica el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 y el artículo 9° del Decreto 832 de 1996, al prever que corresponde a la AFP, vencido el plazo de 4 meses, dar inicio al pago de una pensión provisional, utilizando como primera medida los recursos acumulados en la cuenta individual o con sus propios recursos cuando la carencia de recursos en el pago de las mesadas se deba a *“falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras”*

**DECRETO 565 DE 1994**

*“Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones”*

**ARTICULO 21.** *Las administradoras que incumplan el plazo establecido para*

*pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.*

*Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.*

*En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.*

*PARAGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicios de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo.*

Respecto a la interpretación de estas normas en el marco del reconocimiento de una pensión de garantía mínima dentro del RAIS la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha indicado que es obligación de la AFP, no del afiliado, gestionar todo lo relacionado con la garantía de pensión mínima , incluso reconocer provisionalmente la pensión de vejez con cargo a los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, mientras se efectúa el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte del Ministerio de Hacienda (al respecto la sentencia SL 1534 de 2019<sup>2</sup>)

Ahora no puede desconocerse que a la señora Jiménez Torres le fue reconocida la devolución de saldos, prestación que excluye cualquier otra que pretenda financiarse

---

<sup>2</sup> CSJ SL 1534 de 2019 “Las disposiciones que se acaban de transcribir, además de reiterar que es obligación de la AFP, no del afiliado, gestionar todo lo relacionado con la garantía de pensión mínima consagrada en el tantas veces citado artículo 65, terminan de dejar sin aliento el otro argumento de la censura referido a que el Tribunal no podía ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la señora Mier Ferreira, sin antes contar con el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte del Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Obligaciones Pensionales; cuando lo cierto es que la AFP debe reconocer provisionalmente la pensión de vejez con cargo a los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, mientras se efectúa el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte del Ministerio de Hacienda, como bien lo coligió el Tribunal.

con los recursos acopiados en la cuenta individual. Empero tal incompatibilidad no es absoluta, ya que debe analizarse las condiciones en que se produjo tal reconocimiento, en tanto la misma debe obedecer a una real imposibilidad de acceso a la prestación principal, la pensión.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T 451 de 2022 generó unas sub reglas de estudio respecto a la procedencia de la pensión de vejez pese a haberse concedido la devolución de saldos o indemnización sustitutiva, distinguiendo tres eventos a saber: **1)** El afiliado causó el derecho pensional antes de que se reconociera la indemnización o devolución; **2)** El fondo pensional empleó un requisito inconstitucional o una norma sustantiva inaplicable al momento de realizar el estudio pensional; y **3)** el afiliado siguió cotizando al sistema después del reconocimiento de la indemnización o devolución hasta cumplir con los requisitos para acceder a la pensión. En lo atinente al segundo evento que es el que para el caso concreto tiene relevancia indicó:

*“65. El fondo pensional empleó un requisito inconstitucional o una norma sustantiva inaplicable al momento de realizar el estudio pensional<sup>3</sup>. Este segundo supuesto se presenta cuando el fondo pensional se basa en normas no aplicables a la situación del pensionado o le impone requisitos inconstitucionales al momento de estudiar el reconocimiento de una pensión de vejez. Así, las administradoras de pensiones deberán estudiar las nuevas solicitudes con base en los requisitos legales y jurisprudenciales para verificar si se acreditan, o no, las condiciones para acceder a un reconocimiento pensional. En este evento, es necesario que el afiliado realice la devolución de lo recibido como indemnización o devolución de saldos, con el propósito de no afectar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones.*

Concluyó la Corte Constitucional indicando que el reconocimiento de una indemnización sustitutiva o devolución de saldos no impide el estudio de causación de una pensión por vejez y que en caso de hallar satisfechos los presupuestos para esta prestación principal lo procedente es dar lugar a esta, con deducción o compensación de lo ya pagado y las mesadas pensionales, en un justo equilibrio entre el respecto al mínimo vital y la sostenibilidad financiera del sistema, por tanto la restitución de lo pagado no puede ser óbice ni prerrequisito para el acceso a la pensión de vejez, así indicó:

*“... Así, la accionada supuso equivocadamente que la devolución de las sumas percibidas por el demandante constituía requisito previo para proceder al reconocimiento pensional. En efecto, manifestó repetidamente que “no es posible el reconocimiento de la pensión mínima hasta que se realice la*

---

<sup>3</sup> Al respecto, la Sentencia T-937 de 2013 indicó que es “plausible que entre ambas prestaciones ocurra la compensación, en casos en los cuales se haya pagado una indemnización sustitutiva por error y posteriormente se demuestre que el afiliado sí tenía derecho a la pensión, siempre que se trate de prestaciones de igual naturaleza u origen (vejez-vejez o invalidez-invalidez).” Reiterado en la T-510 de 2017.



devolución total del dinero”<sup>4</sup>. Dicha posición impacta tanto el debido proceso del actor, como su derecho a la seguridad social, al imponer una barrera que contradice la regla jurisprudencial decantada para la solución de este tipo de situaciones. Contrario a lo sostenido por Protección, lo que procede en este caso es realizar el reconocimiento pensional de acuerdo con la realidad de cotizaciones del señor Arango Castaño, y establecer un mecanismo razonable de compensación de los dineros ya pagados, versus las sumas a las que el accionante tenga derecho por concepto de pensión de vejez. Sobre este punto, se reconoce que la administradora de fondos de pensiones debe realizar trámites internos para que la asignación de cuotas parte del bono pensional se ajusten a la realidad de cotizaciones del accionante, pero ello es un ejercicio que no compete al afiliado, ni que puede frustrar su acceso a una prestación cuyos requisitos de acceso ya habría cumplido.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que al momento de recibir la devolución de saldos el accionante tenía acreditados los requisitos para acceder a una pensión de vejez, por lo que su derecho a la seguridad y al debido proceso se vieron afectados por la negativa de Protección a tramitar el reconocimiento pensional al que tendría derecho. **Por lo anterior, se revocará la sentencia de única instancia y ordenará a Protección S.A. y se ordenará realizar un examen en torno al derecho a la pensión del señor Arango Castaño, enfocado especialmente en el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 64 o 65 de la Ley 100 de 1993 y que tenga en cuenta la realidad de sus cotizaciones. Asimismo, se autorizará para que, en caso de darse el reconocimiento pensional, la entidad accionada descuente de los valores reconocidos por concepto pensión de vejez el monto correspondiente a la devolución de saldos, en un ejercicio de compensación que tenga en cuenta tanto el mínimo vital del accionante, como asegurar el retorno de los recursos del sistema general de seguridad social en pensiones. (subrayado y negrita por fuera del texto)**

Con este horizonte se verifica el **caso concreto**, donde la señora Leida Esther Jiménez el 17 de enero de 2019 solicitó a Porvenir el reconocimiento de la pensión de vejez, siendo negada con misiva del 5 de abril de 2019 indicando “si bien tiene cotizadas al Sistema General del Pensiones 1326 semanas de cotización, al tener ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual vigente provenientes de arriendo, no tiene acceso a la Garantía de Pensión Mínima” (pág 92/93 – archivo N° 1)

Se destaca que para el momento en que se efectuó el pago de la devolución de saldos ya existía jurisprudencia de la CSJ que advertía sobre la necesidad de verificar la incompatibilidad para el acceso a la garantía de pensión mínima, pero además la causal esgrimida careció de sustento probatorio, en tanto Porvenir dentro de la contestación de la demanda solo adosó un certificado laboral (que como se mencionó corresponde

---

<sup>4</sup> Comunicación del 28 de enero de 2020. En: Expediente digital T-8.531.306, “T9916115 C1.pdf”, folios 16 y 17.

a un ingreso transitorio), una certificación de ingresos de \$2'000.000 mensuales por canon de arrendamiento en participación (de un inmueble en comunidad de 6 propietarios, lo que eventualmente generaría una porción de \$333.000), un contrato de arrendamiento donde la actora figura como arrendadora pero en calidad de representante legal de una institución educativa, además de los documentos de propiedad de un vehículo y un derecho sobre un inmueble (pág 89/109), por tanto no existía prueba de ingresos mensuales permanentes superiores a 1 SMLMV.

Así las cosas, teniendo presente que para el 17 de enero de 2019 cuando Leida Esther solicitó la pensión de vejez ya superaba los 57 años de edad (nacida el 21/07/1960) y acopiaba más de 1150 semanas cotizadas (así lo indicó el acto administrativo de negación del derecho que señaló 1326 semanas cotizadas), satisfechos estaban los requisitos de acceso a la pensión deprecada, empero esta AFP aduciendo un requisito inexistente dio lugar a un pago que no debió conceder y por el contrario era su deber adelantar las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para la aprobación de la garantía de pensión mínima, cuya negligencia genera de cara al artículo 21 del Decreto 656 de 1994 el reconocimiento provisional con cargo a los recursos de la cuenta individual de la afiliada o con los recursos propios de la AFP, toda vez que los auxilios de la garantía de pensión solo se activarán cuando se avecine el agotamiento de los fondos de la cuenta de ahorro individual.

Prestación que tendrá como fecha de disfrute el 18 de mayo de 2019 (4 meses luego de presentada la petición de reconocimiento pensional) en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales, cuyo retroactivo a enero de 2023 asciende a \$ 44'338.451, del cual se autoriza realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud. Se precisa que es esta la fecha de disfrute de la pensión en tanto se demostró que la continuidad en el empleo deviene de la imposibilidad de acceso a la pensión de vejez y la necesidad de obtener ingresos que garanticen la subsistencia de la demandante:

Año	Valor mesada	N° mesadas	Sub total
2019	\$828.116,00	8,4	\$ 6.956.174,40
2020	\$877.803,00	13	\$ 11.411.439,00
2021	\$908.526,00	13	\$ 11.810.838,00
2022	\$1.000.000,00	13	\$13.000.000,00
2013	\$ 1.160.000,00	1	\$ 1.160.000,00
TOTAL			\$44.338.451,40

A partir del mes de febrero de 2023 Porvenir seguirá reconociendo la pensión de vejez en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 raciones anuales.

Empero no puede desconocerse que la señora Jiménez Torres producto de la devolución de saldos recibió la suma de \$170'446.472, monto que financiará la prestación por vejez acá reconocida, sin que el acceso a la pensión de vejez pueda condicionarse la devolución por parte de la actora en tanto como indicó la Corte Constitucional en sentencia T 451 de 2022 debe existir un equilibrio entre el derecho al mínimo vital de la actora y la protección a la sostenibilidad financiera del sistema.

En este orden de ideas, atendiendo a las aristas particulares del caso que como ya se mencionó comporta un reconocimiento de perjuicios a cargo de la AFP Porvenir por valor de \$170'446.472, pero a la vez la necesidad de restitución del capital a la cuenta de ahorro individual para financiar la pensión de vejez por garantía de pensión mínima se dispondrá que:

- Los dineros ya satisfechos a Leida Esther Jiménez Torres operen como pago de la indemnización de perjuicios a que se hizo referencia que corresponden a \$117'192.445 como perjuicio material y \$53'254.027 en el ámbito moral, sin que exista saldo insoluto por tal valor.
- Corresponde a la AFP Porvenir de sus propios recursos reintegrar a la CIA de la señora Jiménez Torres la suma de \$170'446.472, más los rendimientos que esta suma hubiera generado de haber permanecido en la CIA desde el mes de abril de 2019 (cuando se produjo la devolución a la demandante), dineros con los que se cubrirán las obligaciones pensiones, esto es, se dará lugar al pago del retroactivo pensional por valor de \$44'338.451,40 que cubre las mesadas de mayo 18 de 2019 al 31 de enero de 2023 y que seguirá financiando las mesadas que se sigan causando.
- Corresponde a la AFP Porvenir adelantar las actuaciones de solicitud de garantía de pensión mínima ante el Ministerio de Hacienda tal como lo establece el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, actuaciones que no podrán retrasar, impedir o negar el cubrimiento de las mesadas pensionales consolidadas y futuras, en tanto a la CIA se retornará con cargo de la AFP Provenir la suma de \$170'446.472.

Resta por indicar que las costas en ambas instancias están a cargo de la AFP Porvenir, de las que se tasan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de 2 SMLMV.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos objeto de apelación y revisada la decisión en el grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA DE FORMA TOTAL** la sentencia apelada. en su lugar resuelve:

**PRIMERO:** Dada la consolidación de un estatus dentro del RAIS por devolución de saldos no es posible la declaratoria de ineficacia de la afiliación, como tampoco la asunción de Colpensiones en el reconocimiento de la pensión de vejez, sin embargo, probados como están los perjuicios en el orden material e inmaterial se condena a la AFP Protección al reconocimiento de la indemnización de perjuicios en la suma de \$170'446.472, que se componen de \$117'192.027 como perjuicios materiales y \$53'254.027 en el plano moral.

**SEGUNDO:** Los dineros ya satisfechos a Leida Esther Jiménez Torres operan como pago de la indemnización de perjuicios a que se hizo referencia, sin que exista saldo insoluto por tal valor.

**TERCERO:** Cumplidos los presupuestos para el acceso a la garantía de pensión mínima, se dispone su reconocimiento por parte de la AFP Porvenir a partir del 18 de mayo de 2019, donde se estima un retroactivo pensional acumulado a enero 31 de 2023 por valor de \$44'338.451, además de la obligación para la AFP Porvenir de seguir pagando la prestación a partir del 1° de febrero de 2023 en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales, pudiendo la AFP descontar los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud.

**CUARTO:** Corresponde a la AFP Porvenir de sus propios recursos reintegrar a la CAI de la señora Jiménez Torres la suma de \$170'446.472 más los rendimientos que se hubieren generado desde el mes de abril de 2019 de haber permanecido en la CAI, dineros con los que se cubrirán las obligaciones pensiones, esto es, se dará lugar al pago del retroactivo pensional por valor de \$44'338.451,40 que cubre las mesadas de

mayo 18 de 2019 al 31 de enero de 2023 y que seguirá financiando las mesadas que se sigan causando.

**QUINTO:** Corresponde a la AFP Porvenir adelantar las actuaciones de solicitud de garantía de pensión mínima ante el Ministerio de Hacienda tal como lo establece el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, actuaciones que no podrán como causal para retrasar, impedir o negar el cubrimiento de las mesadas pensionales consolidadas y futuras, como se expuso en la parte motiva.

**SEXTO:** Se absuelve de todas las pretensiones y condenas a Colpensiones, la AFP Skandia y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, empero se exhorta a esta última para que coopere con la AFP Porvenir en los trámites del acceso al aval de la garantía de pensión mínima.

**SÉPTIMO:** Costas en ambas instancias están a cargo de la AFP Porvenir, de las que se tasan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de 2 SMLMV.

Lo resuelto se notifica por Edicto.

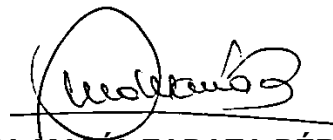
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-013-2020-00065-01  
Demandantes: **LEIDA ESTHER JIMÉNEZ TORRES**  
Demandados: **COLPENSIONES, PORVENIR SKANDIA Y NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA**  
Llamado en Garantía: **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**  
Decisión: **REVOCA**  
Magistrado ponente **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy febrero 22 de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

**SECRETARIO**